

Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil dieciséis.-----

VISTO para resolver el expediente **DGC/D/0056/2013**, relativo al procedimiento administrativo disciplinario instruido a la servidora judicial **JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ**, en su carácter de Secretaria de Primera Instancia, durante su desempeño en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, actualmente adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, México; y:

R E S U L T A N D O:



PRIMERO. Por auto relativo, con motivo del acta administrativa del veintiuno de agosto de dos mil trece, instrumentada por la **DR. EN D. MARÍA MIRELLA FLORES MACEDO**, como Titular del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, el **M. EN D. BARUCH F. DELGADO CARBAJAL**, otrora Magistrado Presidente de este Consejo de la Judicatura, ordenó formar este expediente, relativo al procedimiento administrativo disciplinario instruido a la servidora judicial precisada en el preámbulo de esta resolución.

SEGUNDO. En ese mismo proveído, se designó como instructor al **M. EN A. DE J. ARIEL DE LA O MARTÍNEZ**, entonces Magistrado integrante de este mismo Consejo, a efecto de que se avocara a su substanciación.

TERCERO. Por acuerdo relativo, este sumario se retornó al **M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ**, Integrante de este cuerpo colegiado.

CUARTO. Una vez que se hizo del conocimiento de la Dirección General de Contraloría del Poder Judicial de esta entidad, la autoridad instructora, mediante acuerdo correspondiente, ordenó solicitar el informe a que se refiere el artículo 119 fracción II, de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de México, a la servidora judicial en comento, quien lo rindió dentro del plazo que se le concedió, cuyo contenido se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertara en obvio de repeticiones innecesarias.

QUINTO. Consecuentemente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia que prevé la fracción III del artículo 119 de la Ley Orgánica en consulta, la que se desahogó con todas las formalidades de ley.

SEXTO. En su oportunidad, quedaron los autos en estado para formular la opinión correspondiente, la cual fue sometida a consideración del Pleno de este Consejo de la Judicatura, misma que^D fue discutida en la sesión que tuvo lugar el día de la fecha; y:

C O N S I D E R A N D O:

I. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 párrafo cuarto, 109 párrafo primero y 113 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 52, 63 fracción VII, 111 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad; 2, 3 fracción II, 41 y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, este cuerpo colegiado es competente para conocer, substanciar y resolver este asunto.

II. Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de este Consejo de la Judicatura, el procedimiento administrativo disciplinario, tiene por objeto determinar el incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que éstos cometan en el ejercicio de su cargo por acciones u omisiones y la aplicación de las sanciones que correspondan.

III. En ese sentido, cabe resaltar que se inició este procedimiento disciplinario en contra de la servidora judicial denunciada, por considerar que con su conducta y en el ejercicio de sus funciones como Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, pudo incumplir con las obligaciones específicas que establece el artículo 89 fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad; asimismo, pudo actualizar la falta administrativa prevista en el numeral 115 fracción I, de ese mismo ordenamiento legal; amén de que pudo incumplir con las obligaciones de carácter que señala el artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Preceptos legales que para mayor ilustración, se transcriben a continuación, en su parte conducente:

De la Ley Orgánica:

"Artículo 89. Son obligaciones de los secretarios:

...

III. Dar cuenta diariamente dentro de las 24 horas siguientes de su recepción,... al Juez... con los escritos, promociones y avisos presentados por los interesados, así como con los oficios y demás documentos que se reciban...

...

XIV. Llevar al corriente los siguientes libros: el de gobierno, para anotar entradas, salidas y el estado de los asuntos en cada ramo; el de registro diario de promociones; el de entrega y recibo de expedientes y comunicaciones; el de exhortos para cada materia; el de entrega y recibo de expedientes al archivo judicial y los demás que sean necesarios para cada materia, a juicio del Consejo de la Judicatura.

...

Artículo 115. Son faltas administrativas de los secretarios de acuerdos, las acciones u omisiones siguientes:

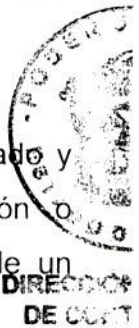
I. Dar cuenta, fuera del término legal, con los oficios y documentos oficiales dirigidos al juez y con los escritos y promociones de las partes;

...

De la Ley de Responsabilidades:

“Artículo 42. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;



XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

...

Este último supuesto, en relación con los numerales 1.118 y 1.125 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen:

“Artículo 1.118. El secretario dará cuenta al titular del Tribunal con la presentación de las promociones a más tardar al día siguiente. La razón de cuenta se rubricará por aquel y el Juez o Magistrado.

...

Artículo 1.125. Los secretarios foliarán debidamente los expedientes, al agregarse cada una de las horas; rubricarán todas éstas en el centro de lo escrito y pondrán el sello del Tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras...”

Lo anterior, derivado de que pudo:

- a) Haber incumplido con la presentación oportuna de diecisiete proyectos de acuerdos.

- b) Que al día trece de agosto de dos mil trece, faltaba el informe justificado relacionado con el amparo interno 36/2013 el cual realizó hasta el sábado diecisiete de ese mismo mes y año.
- c) No había subido acuerdos al sistema de expediente virtual.
- d) No sellar, foliar ni rubricar los expedientes.
- e) Omitir realizar las anotaciones en los libros.

Según se desprende de las circunstancias que se hicieron constar en el acta administrativa génesis de este procedimiento disciplinario, las que para mayor ilustración, se transcriben a continuación en su parte

conducente:



“...procede a levantar la presente acta administrativa a la Licenciada **JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ**, quien funge como segundo secretario de acuerdos de este juzgado, derivado de las irregularidades que existen en esa secretaria a su cargo, funcionaria judicial que en repetidas ocasiones se le ha hablado para que cumpla en forma oportuna con las obligaciones que le corresponde por el cargo conferido, como se advierte del memorándum de fecha catorce de agosto de dos mil trece, donde fue firmado por las secretarías, misma que no cumple oportunamente con la presentación de los proyectos de los acuerdos, como lo establece el artículo 89 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, ya que al momento del levantamiento de la presente acta aún se encuentran pendientes diecisiete acuerdos por entregar y esto ha sido en forma reiterada, así mismo la falta de estudio que muestra para con los asuntos, manifestando que ella no sabe nada de derecho familiar y el día miércoles trece de agosto del año en curso, al hacer una revisión de los libros se le hizo saber que faltaba el informe justificado del amparo interno número 36/2013, lo cual realizó hasta el sábado diecisiete del mes y año en curso, asimismo se han observado varias irregularidades tales como acuerdos que no se han subido al sistema del expediente virtual, expedientes sin folio sello y rúbrica, así como falta de anotaciones en los libros, incumpliendo lo previsto por el artículo 89 fracción XIV de la Ley en cita...”

En respuesta a tales imputaciones, la servidora judicial denunciada, al rendir el informe que se le requirió en términos de lo que establece el artículo 119 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta

entidad, manifestó lo que a su interés convino y ofreció las pruebas que estimó pertinentes; informe que, para evitar transcripciones redundantes, también se tiene aquí por reproducido.

IV. Bajo ese contexto, este Consejo de la Judicatura procede al análisis de todas y cada una de las constancias que integran el expediente en que se actúa, valorándolas de conformidad con lo que establecen los artículos 95 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México, aplicado de manera supletoria a este asunto por disposición del numeral 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a efecto de determinar si la servidora judicial denunciada incurrió o no en responsabilidad administrativa, lo cual se hace bajo las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Uno de los principios rectores del derecho, aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, el que por ende, es reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente.

Esto es, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción, teniendo como consecuencia procesal, entre otras, el desplazar la carga de la prueba a quien denuncia, en atención al derecho de debido proceso.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 41, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2006590, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso."



En ese sentido, es dable establecer que el principio de presunción de inocencia, se constituye como un derecho de las personas denunciadas a que no se les imponga una sanción a menos que su responsabilidad haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.4o.P.36 P, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página 2295, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 173507, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:



DIRECCIÓN
DE CI

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES. De acuerdo con la tesis P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", este principio aparece implícito en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos principios de debido proceso legal y el acusatorio dando lugar a que el acusado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio Público acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculcado. Al tenor de estos lineamientos se colige que el principio de inocencia se constituye por dos exigencias: a) El supuesto fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y, b)

La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, el primer aspecto representa más que una simple presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación estrecha con la garantía de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto; mientras que el segundo se traduce en una regla en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculpado debe ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y haber sido obtenidos de manera lícita. Así, la presunción de inocencia se constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO."

Bajo ese contexto, resulta inconcuso que los principios de presunción de inocencia y de carga de la prueba que imperan en materia penal, son plenamente aplicables a los procedimientos de responsabilidad administrativa que se sigue a todo servidor público de cualquier órgano de gobierno, incluidos por supuesto los que laboran para esta institución, ya que éstos tienen a su favor, la presunción de reunir los requisitos de imparcialidad, capacidad y honestidad, además de su firme convicción de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, pues por tal motivo se les otorgó su nombramiento en este Tribunal.



De manera que, si en su contra se promueve una "queja administrativa" o se hace una denuncia, también administrativa, imputándoles la comisión de conductas graves en su actuación, la carga de la prueba corresponde al que formula dicha queja o denuncia; es decir, esa presunción debe ser desvirtuada por quien afirma lo contrario.

En apoyo de lo anterior, esta autoridad administrativa hace suyo, por identidad de razón, el criterio contenido en la tesis aislada VI.3o.A.332 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 3058, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 164921, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADORES. EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS SON PLENAMENTE APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE CARGA DE LA PRUEBA QUE IMPERAN EN MATERIA PENAL. Los principios constitucionales de presunción de inocencia y de carga de la prueba que imperan en materia penal, son plenamente aplicables a los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instruyen a los juzgadores, ya que éstos tienen a su favor la presunción de que ejercen la función jurisdiccional atendiendo, entre otros, a los principios de honradez e imparcialidad, así como que han cumplido con los requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser designados en su cargo, lo que se traduce en que se les considera como personas responsables, honorables y competentes que han prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición de justicia. Es por ello que corresponde al órgano investigador demostrar que son administrativamente responsables de la conducta infractora que se les atribuye, además de comprobar que indudablemente ésta sea la que realizaron. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO."

Así como la tesis P. XLIX/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable Semanario Judicial de la Federación, VIII, Octubre de 1991, página 12, correspondiente a la Octava Época, con número de registro 205763, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:



CC-111-111-111
CC-111-111-111

"QUEJA ADMINISTRATIVA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A SU FORMULANTE CUANDO ATRIBUYE A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES FEDERALES LA COMISION DE CONDUCTAS GRAVES EN SU ACTUACION. Los nombramientos de Jueces y Magistrados federales por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 12, fracción XXII, 32, 39 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite inferir que las personas designadas tienen la presunción de reunir los requisitos de imparcialidad, capacidad y honestidad, además de su firme convicción de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que si en su contra se promueve una "queja administrativa" imputándoles la comisión de conductas graves en su actuación, la carga de la prueba corresponde al que formula la denuncia dado que el Tribunal Pleno o el Ministro Inspector, en su caso, no pueden convertirse en inquisidores para allegar las pruebas que, a juicio del formulante, fundamentan o hacen derivar la conducta incorrecta atribuida, pues de aceptar esa postura resultaría un contrasentido con la presunción antes aludida que los funcionarios judiciales tienen en su favor y que, por lo mismo, debe ser desvirtuada por quien afirma lo contrario."

En el particular, y partiendo de las circunstancias que se hicieron constar en el acta administrativa génesis de este procedimiento disciplinario, es dable resaltar que las conductas que se imputan a la servidora judicial denunciada, consisten en que pudo:

- a) Haber incumplido con la presentación oportuna de diecisiete proyectos de acuerdos.
- b) Que al día trece de agosto de dos mil trece, faltaba el informe justificado relacionado con el amparo interno 36/2013 el cual realizó hasta el sábado diecisiete de ese mismo mes y año.

- c) No había subido acuerdos al sistema de expediente virtual.
- d) No sellar, foliar ni rubricar los expedientes.
- e) Omitir realizar las anotaciones en los libros.

Al respecto, esta autoridad administrativa concluye, que no es factible decretar responsabilidad administrativa a la servidora judicial denunciada, pues en el acta administrativa que motivó el inicio de este procedimiento disciplinario, se omitió precisar, con toda claridad, mayores datos que permitan identificar las inconsistencias y/o deficiencias denunciadas.

Esto es, no se precisan los expedientes en los que la servidora judicial denunciada no había proyectado los acuerdos que a decir de la Juzgadora que instrumentó el acta administrativa que nos ocupa, estaban pendientes de entregar; la fecha en que fue requerido el informe justificado; los acuerdos que no subió al sistema del expediente virtual; los expedientes en que omitió sellar, foliar y rubricar; y aquellos respecto de los cuales se abstuvo de realizar las anotaciones en los libros, que por cierto, tampoco precisa la naturaleza de éstos.

Datos que se estima, eran trascendentales para poder analizar, de manera objetiva, las conductas a ella imputadas, pues de estudiarlas en la forma y términos en que aparecen redactadas en la aludida acta administrativa, se estaría vulnerando su garantía de audiencia que, por disposición constitucional, debe ser respetada.

Ergo, podemos concluir que la denuncia realizada a través del acta administrativa con que se inició este procedimiento disciplinario, deviene improcedente, pues las conductas en ella narradas devienen genéricas.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, los criterios números 6 y 75 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal y la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente:

"CRITERIO No. 6:

ARGUMENTOS GENÉRICOS. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA. Las argumentaciones genéricas, irrazonadas y carentes de sustento, que no precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se perpetraron las conductas irregulares atribuidas al funcionario judicial y que constituyen causa de responsabilidad administrativa, impide realizar el pronunciamiento respectivo, por tanto, la queja administrativa en que se hacen valer ese tipo de argumentos deficientes, es improcedente."



GENERAL
ALCALA

"CRITERIO No. 75:

IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA, SI EL INCONFORME ES OMISO EN PRECISAR LOS DATOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS IRREGULARIDADES QUE IMPUTA. Del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se infiere que la litis en el procedimiento administrativo de responsabilidad se establece con los hechos contenidos en el escrito de queja o denuncia correspondiente y con el informe rendido por el o los servidores públicos denunciados. Conforme a lo anterior, la parte denunciante, al momento de formular la queja, está obligada a precisar con toda claridad en qué consiste la infracción administrativa que imputa al funcionario o funcionarios denunciados; el lugar y fecha de su comisión, así como los demás datos que identifiquen plenamente los hechos atribuidos. Por tanto, cuando en el escrito de queja, el promovente omite señalar, en forma clara y precisa, los hechos en que sustenta la infracción administrativa que atribuye al funcionario judicial denunciado, la queja resultará improcedente."

Aunado a lo anterior, debe decirse que las imputaciones que se analiza, devienen infundadas, ya que no encuentran sustento en medio de convicción alguno que las evidencie; ergo, además de genéricas, resultan ser manifestaciones unilaterales por parte de los servidores públicos que las relataron.

En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis *IV.2o.A.126 A*, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, página 1416, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 179803, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

"PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad."

No se soslaya mencionar que al acta administrativa que nos ocupa, se adjuntó copia fotostática simple de un memorándum fechado el catorce de agosto de dos mil trece, supuestamente emitido por la propia Juzgadora que instrumentó la citada acta administrativa, a los Secretarios adscritos al Juzgado a su cargo; documento del que se puede leer, que exhorta a los aludidos fedatarios judiciales a que cumplan con los lineamientos dispuestos en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad, específicamente a dar cuenta y entrega completa del acuerdo diario a las catorce horas del día laboral correspondiente, con la finalidad de que éste se encuentre en tiempo con el notificador y a su vez sea turnado al archivo debidamente notificado.

Sin embargo, tal constancia deviene ineficaz para tener por acreditadas las conductas se nos ocupa, en razón de que, al tratarse de una copia simple, adquiere el valor de un indicio de la instrucción que la titular del Juzgado pudo haber dado a los Secretarios de

Acuerdos de su exigencia; es decir, de que debían dar cuenta y entregar completo el acuerdo diario a las catorce horas; pero no para evidenciar, que en aquél instante, le faltara entregar diecisiete proyectos de acuerdo.

Consecuentemente, no es factible fincar responsabilidad administrativa a la servidora judicial denunciada.

Atendiendo al principio de exhaustividad que exige toda resolución, es preciso señalar que la servidora judicial denunciada, al rendir el informe que se le requirió en términos del artículo 119 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, vertió una serie de argumentos tendentes a que no se le fincara responsabilidad administrativa alguna; ofreciendo incluso, los medios de convicción que estimó oportunos; sin embargo, esta autoridad administrativa estima innecesario realizar el análisis correspondiente a ellas, dado el resultado obtenido del estudio de las actuaciones que integran este sumario.

V. Por los argumentos precisados en el cuerpo de esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, este Consejo de la Judicatura declara que la servidora judicial **JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ**, en su carácter de Secretaria de Primera Instancia, durante su desempeño en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, actualmente adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, México; **NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** de las conductas que se le imputaron en este procedimiento disciplinario.

Consecuentemente, de conformidad con el numeral 121 de la propia Ley Orgánica, se ordena publicar un extracto de la presente resolución en el boletín judicial.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. Se declara que la servidora judicial **JULIA FLORIBERTA ARISTA VÁZQUEZ**, en su carácter de Secretaria de Primera Instancia, durante su desempeño en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, actualmente adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, México; **NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** de las conductas que se le imputaron en este procedimiento disciplinario.

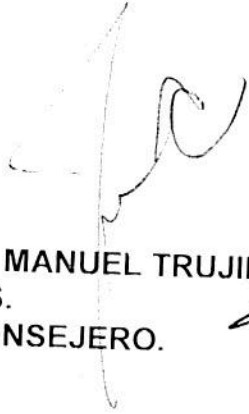
SEGUNDO. Consecuentemente, se ordena publicar un extracto de la presente resolución en el boletín judicial.

TERCERO. Por los conductos legales, notifíquese la presente resolución a la citada servidora judicial y háganse las anotaciones del caso en su expediente personal.


CUARTO. En su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido.

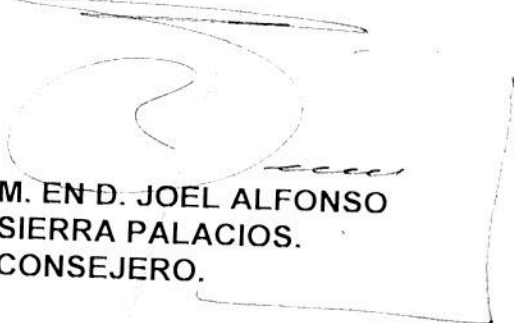
ASÍ LO RESOLVIERON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, **CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO**, ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS **M. EN C. P. FABIOLA CATALINA APARICIO PERALES**, SIENDO PONENTE EL **M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ**, INTEGRANTE DEL PROPIO CONSEJO.----- DOY FE.-----

MGDO. DR. EN D. SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.


LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO
CISNEROS.
MGDO. CONSEJERO.



M. EN D. P. P. PALEMÓN JAIME
SALAZAR HERNÁNDEZ.
MGDO. CONSEJERO.



LIC. JUAN MANUEL TELLES
MARTÍNEZ.
JUEZ CONSEJERO.


M. EN D. JOEL ALFONSO
SIERRA PALACIOS.
CONSEJERO.



CONSEJO GENERAL
DEL ESTADO DE MÉXICO


M. EN D. MARCO ANTONIO
MORALES GÓMEZ.
CONSEJERO.


LIC. OTONIEL CAMPIRÁN
PÉREZ.
CONSEJERO.


M. EN C. P. FABIOLA CATALINA APARICIO PERALES.
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.

FIRMAS QUE CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITIÓ EN EL EXPEDIENTE
NÚMERO DGC/D/0056/2013.



DIRECCIÓN
DE COMISIÓN